



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

///doba, 23 de junio de 2022.

### Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"Incidente de nulidad en autos LAFUENTE SIVILOTTI, Matías Gonzalo y otros... por asociación ilícita, alteración dolosa de registros, defraudación por administración fraudulenta"** Expte. FCB 70949/2018/19/CA10, venidos a conocimiento de la Sala A del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, doctor Enrique Senestrari y por AFIP-DGI, en carácter de querellante particular, representada por la doctora María Elisa Diez, en contra de la resolución dictada con fecha 27.10.2021 por el Juez Federal N° 1 de Córdoba, en la que dispuso: RESUELVO: **"1.- DECLARAR LA NULIDAD** de los informes remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151 de las presentes actuaciones y, en consecuencia, desglosarlos de la causa (conf. Art. 167 inc. 2, 168 primer párrafo del CPPN y art. 101, 3er párrafo de la ley 11.683). Como así también declara la nulidad de los actos que fueran su consecuencia...".

### Y CONSIDERANDO:

**I.-** Las presentes actuaciones vienen a consideración del Tribunal para resolver los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal N° 1 de Córdoba y por la querellante AFIP-DGI, en contra de la resolución de primera instancia cuya parte dispositiva ha sido precedentemente transcripta.

**II.-** Para así resolver, el Magistrado Instructor entendió que, de la observación de los oficios por los cuáles se requirió los informes al órgano recaudador AFIP-DGI, surge que no se solicitó en ningún momento y a ningún ~~órgano jurisdiccional, ni tampoco lo dispuso por sí el Sr.~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Fiscal, el correspondiente levantamiento del secreto fiscal.

Agregó el Juez que, a sabiendas que se estaba ante una violación al art. 101 de la ley 11.683, la Administración Federal de Ingresos Públicos de todos modos acompañó los mencionados informes, siendo que la orden para levantar el secreto fiscal debe ser escrita y fundada (art. 123 del CPPN), pues la fundamentación de toda resolución judicial es aún más estricta cuando se trata de medidas que implican la intromisión del Estado en ámbitos de privacidad o respecto información sensible, tal como está concebida la información fiscal de todos los ciudadanos.

Al respecto, expresó que la fundamentación que requiere tal medida no consta en autos, sino que, por el contrario, la información requerida vinculada con los contribuyentes, entre personas físicas y jurídicas, ha sido solicitada de manera informal, sin ningún recaudo ni fundamento que lo justifique, siendo que finalmente se sindicó a 23 personas, violando los preceptos mencionados, lo que amerita la declaración de nulidad de dichos informes y de todos los actos posteriores dictados en su consecuencia.

Asimismo, puso de resalto el Juez de primera instancia la trascendencia de esos informes solicitados al comienzo de la causa, ya que a partir de los datos obtenidos en ellos es que se ordenan las escuchas telefónicas, allanamientos y demás medidas probatorias que culminaron con el procesamiento de la mayoría de los imputados en la causa principal.

Por las razones dadas, el Magistrado resolvió declarar la nulidad y el desglose de los informes citados, todo ello a los fines del reguardo del debido proceso  
(~~conf. art. 167 inc. 2, 168 primer párrafo del C.P.P.N.~~)

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

como así también declaró la nulidad de todos los actos que fueran su consecuencia de conformidad a lo establecido en el art. 172 del C.P.P.N. (v. fs. 57/59).

**III.-** En contra de dicha resolución, con fecha 1.11.2021, el señor Fiscal Federal de primera instancia interpuso recurso de apelación por entender que no resulta procedente la nulidad dictada por el Juez instructor, por no encontrarse dentro de las expresamente establecidas por la ley.

Al respecto sostuvo que difícilmente haya pasado inadvertido una nulidad absoluta tan evidente como la que se alega, a los distintos abogados defensores, fiscales, jueces de instrucción e incluso jueces de Cámara, que han intervenido desde la instrucción.

Agregó, además, que las defensas recién se adhieren al planteo una vez conocido, pero que jamás "vieron" la nulidad porque la misma no existe.

Asimismo, sostuvo que existen numerosos casos similares al que se ventila en esta causa, iniciados con los mismos pedidos de informes a AFIP por parte del Ministerio Público Fiscal y radicados ante el mismo Tribunal, pero que no han sido cuestionados por las defensas y tampoco han sido anulados por el Juez de primera instancia.

El apelante manifestó también que la resolución dictada no es una simple disparidad de criterio ni un hallazgo de la defensa o del Tribunal, sino que con tal resolutorio el Juez ha dejado al descubierto que actuó fuera de la legalidad y benefició -entre otros-, a un pariente, el imputado Céspedes, por lo que solicitó que tal conducta sea investigada penal y disciplinariamente, a los fines de lograr un correcto funcionamiento del sistema de ~~administración de justicia.~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Agregó que el Juez ya estaba anoticiado en los inicios de la investigación por la Fiscalía acerca de la existencia de los informes de AFIP cuestionados y que expresamente se le había solicitado que convalide dicha información o que se levante el secreto fiscal y reedite las medidas. Expresó el Fiscal que tal petición fue analizada por el Juez, quien no declaró la nulidad en aquel momento, sino que continuó con el trámite de la investigación, disponiendo el levantamiento del secreto fiscal para requerir información relacionada con los sospechados.

Por otra parte, el Fiscal Federal se remitió al dictamen de AFIP presentado en el incidente de nulidad, en el cual se dejó en claro la naturaleza del secreto fiscal, detallando a quienes y en qué casos les es oponible, sosteniendo cómo y por qué el Ministerio Público Fiscal está habilitado para requerir informes que contengan información protegida por el secreto fiscal.

En otra parte de su recurso, el Fiscal interviniente hizo alusión a las facultades propias que se le reconoce al Ministerio Público Fiscal en virtud de lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional, el cual fue reglamentado por el Congreso de la Nación mediante el dictado de la ley 24.946.

En tal sentido, mencionó que el art. 26 de la ley aludida reconoce a los fiscales potestades para requerir informes a organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y agregó que la ley 24.946 fue luego reemplazada por la ley 27.148, la cual en su artículo 7 reconoce al Ministerio Público atribuciones para solicitar informes a organismos tales como AFIP.

Asimismo el apelante citó textualmente los ~~artículos 212 y 213 del CPPN. en cuanto hacen referencia a~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

las atribuciones que le son reconocidas al Ministerio Público Fiscal y que lo facultan para realizar requerimientos como los que ha hecho y hace diariamente a través de distintas dependencias y en múltiples causas, pues no es cierto que se requiera disposición jurisdiccional al respecto, ya que se trata de una diligencia investigativa que puede producir el fiscal a cargo de la investigación.

Posteriormente, el Fiscal Federal manifestó que la presente causa se inicia a partir de una denuncia formulada por Diego Clemente Peralta, quien sería denunciante y víctima y que, la información que solicitó oportunamente el Ministerio Público estaba relacionada con el propio denunciante, resultando imprescindible para el inicio de la investigación preliminar, la cual no se encontraba amparada por el secreto fiscal.

Puso de resalto, una vez más, que los magistrados del Ministerio Público Fiscal si están facultados para requerir a AFIP información amparada en el artículo 101 de la ley 11.683, pero que aquí el caso es que además de poder hacerlo como Fiscal, al no encontrarse esa información amparada en la norma referida, mucho menos aún podría existir nulidad ni agravio alguno para la defensa.

Sin perjuicio de ello y en el caso que la Cámara Federal no comparta tal posición, el Fiscal Federal manifestó que nunca pudo haber ilegitimidad en la obtención de la información cuestionada, pues era referida al propio denunciante y estaba destinada a investigar un delito que lo perjudicaba.

Sobre el punto manifestó que los informes de AFIP eran referidos al denunciante, quien había pedido que se investigue lo que alguien había hecho con su clave fiscal, ~~comprometiéndolo como contribuyente.~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Expresa el recurrente que si bien resulta entendible la disconformidad de la defensa con el procesamiento dictada recientemente en contra de sus defendidos, lo cierto es que se trata de un planteo meramente dilatorio ante actos procesales que han sido consentidos tácitamente y que han logrado su finalidad sin afectar derecho alguno.

Por otra parte, hizo mención a que el Juez ignoró los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público y por el querellante particular, simulando haber dado intervención a las partes para luego, sin siquiera citar las manifestaciones realizadas por estas, violando el debido proceso, emitiendo una resolución con fundamentos aparentes (v. fs. 62/67).

**IV.-** Con fecha 2.11.2021, la querellante particular AFIP-DGI, con la representación de la doctora María Elisa Diez, interpuso recurso de apelación en contra del resolutorio aludido.

Luego de hacer mención a los antecedentes de la presente causa, manifiesta que el Juez Federal de primera instancia realizó una errónea aplicación de la ley sustancial y procesal, como así efectuó una incorrecta valoración de la prueba rendida en autos. En tal sentido, entendió que la decisión impugnada es nula por carecer de la debida fundamentación legal, de conformidad con lo previsto en el art. 123 del CPPN.

Al respecto, expresó la doctora Diez que la fundamentación del Magistrado de primera instancia resulta meramente aparente, tautológica, retórica y por ende, inválida. En tal sentido, señaló que la resolución puesta en crisis contradice las constancias de autos, ya que alude que los informes presentados por AFIP contienen datos

~~sensibles de los investigados, siendo que las~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

contestaciones de oficio declaradas nulas sólo contienen información referida a la situación fiscal del denunciante Diego Clemente Peralta y no de los imputados en autos. Agregó que los datos relativos al nombrado, requeridos en los oficios librados por el Ministerio Público Fiscal no corresponden a manifestaciones ni declaraciones juradas hechas por su persona, sino que fueron maliciosamente fraguados, lo que significa que al no ser el contenido de verdaderas declaraciones hechas por su persona, no se encuentran protegidas por secreto fiscal.

Entendió la doctora Díez que la resolución impugnada conduce a conclusiones absurdas y violatorias de los derechos fundamentales de las víctimas, basándose en rigorismos rituales que no tienen asidero legal.

Por otra parte, sostuvo que el Juez instructor resuelve declarar la nulidad de los actos procesales aludidos sin mencionar siquiera cual es el concreto perjuicio que el vicio invocado generaría a la parte que lo invoca. En tal sentido, dijo que es sabido que la nulidad sólo procede cuando quien pretende su declaración ostenta un interés legítimo que habilita a solicitarla y que, en el resolutorio atacado no se menciona ni se explica cuál es el perjuicio real, actual, concreto e ilegalmente ocasionado al imputado incindentista o a los acusados que adhirieron al planteo de nulidad presentado por la defensa.

Agregó la representante de la querella particular AFIP-DGI que la resolución cuestionada aduce que la exigencia del levantamiento del secreto fiscal viene impuesta por el tercer párrafo del art. 101 de la ley 11.683, siendo que de la lectura de la misma se revela no sólo que no se exige el dictado de ninguna "resolución de levantamiento de secreto fiscal", sino que impone que en ~~todos los casos el contenido de las declaraciones juradas,~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

manifestaciones e informes presentados por los contribuyentes y terceros deberán ser admitidos como prueba en los procesos penales en los que dicha información se encuentre directamente relacionada con los hechos investigados en el proceso.

Seguidamente, la apelante advirtió que la decisión jurisdiccional apelada brinda el mismo tratamiento diferenciado a cuestiones no asimilables entre sí. Entendió que en las contestaciones de oficio declaradas nulas se brindó información sobre la situación fiscal y económica obrante en las bases de datos de AFIP respecto a Diego Clemente Peralta y también se identificaron los números de IP desde los cuales se emitió la facturación electrónica registrada a su nombre, declarando el Juez la nulidad de todo lo informado sosteniendo que los datos se hallaban resguardados por el secreto fiscal.

En relación a ello, la doctora Díez expresó que el dato relativo a los números de IP, en ningún caso se encuentran alcanzados por el secreto fiscal instruido en el artículo 101 de la ley 11.683 porque no es el producto de declaraciones juradas, manifestaciones o informes presentados por los contribuyentes a AFIP, sino que, por el contrario, son datos técnicos externos que identifican la interfaz de red que permite sindicar cuál es el proveedor del servicio de internet utilizado al momento de realizarse determinadas transacciones electrónicas.

A ello agregó que el Juez resolvió, además, extender la nulidad declarada a todos los actos que fueran consecuencia de los informes declarados inválidos, sin precisar cuáles son estos, mencionando tan sólo que como consecuencia de los actos procesales anulados se dispusieron escuchas telefónicas, allanamientos y demás ~~medidas probatorias que no surgieron de informes~~ brindados

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

por AFIP sino de datos aportados por las compañías de telefonía y prestatarias de servicios de internet que fueron oficiadas por el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, sostuvo que el Juez no dijo por qué dispuso no aplicar al caso las disposiciones de la Constitución Nacional, las leyes 27.148 y 11.683 y el CPPN. citadas por la querella, lo cual demuestra que el fallo apelado carece de motivación suficiente y lesiona los derechos de acceso a la justicia, debido proceso legal y de defensa de la parte querellante, motivo por el cual, en virtud de lo establecido en el art. 123 del CPPN, corresponde el dictado de su nulidad.

Entendió la doctora Díez que la decisión adoptada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba en el presente incidente es propio de los modelos procesales inquisitivos, señalando que el CPPN. ha adoptado un modelo mixto conforme el cual se reconoce al Ministerio Público Fiscal amplias potestades investigativas en todos los casos en los que la instrucción se encuentre delegada a la Fiscalía por decisión judicial, por imperio legal o por tratarse de una investigación preliminar iniciada tras haberse recibido una denuncia en la propia fiscalía o dispuesta de oficio por el Fiscal actuante (v. fs. 68/81).

**V.-** Radicados los autos en esta Alzada, con fecha 2.6.2022 se celebró audiencia oral en los términos del art. 454 del CPPN., a los fines de que las partes expresen los fundamentos y consideraciones sobre los recursos de apelación oportunamente interpuestos, labrándose la correspondiente acta de audiencia a cuyo texto remite el Tribunal en honor a la brevedad.

**VI.-** Sentadas y reseñadas en los precedentes parágrafos las posturas asumidas por las partes corresponde ~~introducirse propiamente en el tratamiento~~ de los recursos

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

de apelación deducidos. A tal efecto, se sigue el orden de votación que surge del certificado actuarial obrante a fs. 159 de autos.

**La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela S. Montesi, dijo:**

Entrando al análisis de la cuestión traída a estudio de la Suscripta, corresponde en esta oportunidad decidir si resulta ajustado a derecho o no la nulidad dispuesta por el Juez de primera instancia en relación a los informes remitidos por AFIP e incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151, su desglose de la causa y la nulidad de los actos que fueran su consecuencia.

Previo a ingresar al caso particular, estimo necesario efectuar una serie de consideraciones preliminares a los fines de establecer el marco jurídico y normativo en el cual debe situarse el caso traído a estudio.

**I.- Régimen de las Nulidades. Orden general.**

En primer lugar, atento la cuestión suscitada en autos, en la cual se dispuso declarar la nulidad de los informes remitidos por AFIP, incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93 y 121/151 de las actuaciones principales, corresponde dejar en claro que la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal es la establecida por el art. 166 del C.P.P.N., que establece: ***“Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”***.

En tal sentido, dicho precepto legal dispone que la sanción procesal aludida constituye una grave decisión que fulmina la existencia y los efectos de un acto del proceso por estar viciado de irregularidad manifiesta, toda vez que su iniquidad conlleva de modo insoslayable su **invalidación**.

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

Con motivo de la evidente gravedad de tal sanción procesal, el régimen del Código Procesal Penal de la Nación conlleva **un criterio de interpretación restrictivo en materia de nulidades**. Ello es así, toda vez que dicho cuerpo adopta un sistema legalista en cuanto a esta sanción procesal, en virtud del cual, un acto no será invalidado cuando presente cualquier irregularidad procesal, sino que, por el contrario, sólo procederá en los casos en que exista una grave inobservancia de las formas y de los requisitos sustanciales previstos.

En ese orden, las nulidades absolutas quedan reservadas exclusivamente a la violación de las normas constitucionales o cuando la ley así lo establezca expresamente. Las demás actuaciones del proceso se encuentran sujetas al análisis particular del órgano jurisdiccional, que es el que en definitiva ponderará, si efectivamente ha existido una violación a las normas sustanciales y procesales, susceptibles de provocar el necesario y suficiente interés jurídico vulnerado, que torne procedente una declaración de nulidad.

En esta idea reposa uno de los basamentos del sistema nulificante del proceso penal, desde que no se admite la nulidad por la nulidad misma, pues si el acto procesal, pese a su irregularidad no afecta un derecho, es evidente que no hay interés normativamente protegido que justifique tal declaración, de acuerdo a lo previsto por el art. 169 del CPPN.

De ese modo, es el interés o derecho lesionado, el perjuicio o daño, la medida con la que debe ponderarse la posible nulidad del acto y ello debe estar demostrado y verificado acabadamente en el caso concreto.

### **II.- Acceso a la información. Secreto Fiscal.**

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Aproximándome a lo medular de la cuestión puesta a consideración, cabe destacar que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de todos los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los arts. 1º, 33, 41, 42 y 75 inc. 22, los cuales incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales (art. 13, Convención Interamericana de Derechos Humanos; art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 19, Declaración Universal de Derechos Humanos), cuya finalidad se orienta a permitir la participación ciudadana en el control de la corrupción y eficiencia de las instancias gubernamentales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En tal sentido se ha dicho **"las personas tienen el derecho de solicitar documentación e información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado"** (cfme. lo establecido en el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos).

Cabe destacar que el principio de transparencia tiene como finalidad propiciar la confianza social en toda la actividad pública estatal, de modo que las personas conozcan las normas, las reglas, los procedimientos y la información general del poder público.

Sin embargo y, no obstante la importancia institucional que involucra el derecho de todo habitante de solicitar información de los archivos que posee el Estado, cabe destacar que ningún derecho puede ser considerado absoluto, sino que, debe garantizarse su ejercicio siempre que éste no implique la lesión a derechos de terceros también amparados constitucionalmente.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que **el derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, sino que**

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

puede estar sujeto a limitaciones, siendo admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. A ello, añadió que el secreto sólo puede justificarse para proteger un interés igualmente público, por lo tanto la reserva sólo resulta admisible para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (Fallos: 337:256).

Así, el art. 101 de la ley 11.683 ha regulado los alcances del secreto fiscal como una de las excepciones al derecho al acceso a la información.

El mencionado artículo textualmente establece, en lo que aquí interesa *"Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.*

*Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.*

*Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.

...No están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezca.

El secreto establecido en el presente artículo no regirá: a) Para el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos. b) Para los Organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones. c) Para personas o empresas o entidades a quienes la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS encomiende la realización de tareas administrativas, relevamientos de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones y otras para el cumplimiento de sus fines. ... d) Para los casos de remisión de información al exterior en el marco de los Acuerdos de Cooperación Internacional celebrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos con otras Administraciones Tributarias del exterior, ... e) Para la autoridad

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

competente de los convenios para evitar la doble imposición celebrados por la República Argentina, cuando actúe en el marco de un procedimiento de acuerdo mutuo regulado en el Título IV de esta ley. f) Respecto de los balances y estados contables de naturaleza comercial presentados por los contribuyentes o responsables, atento a su carácter público. g) Para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la prevención y fiscalización del fraude en el otorgamiento de prestaciones o subsidios que ese organismo otorgue o controle y para definir el derecho al acceso a una prestación o subsidio por parte de un beneficiario.

La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS estará obligada a suministrar, o a requerir si careciera de la misma, la información financiera o bursátil que le solicitaran, en cumplimiento de las funciones legales, la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina, sin que pueda alegarse respecto de ello el secreto establecido en el Título V de la Ley N° 21.526 y en los artículos 8°, 46 y 48 de la Ley N° 17.811, sus modificatorias u otras normas legales pertinentes.

La información amparada por el secreto fiscal contenido en este artículo se encuentra excluida del derecho de acceso a la información pública en los términos de la ley 27.275 y de las leyes que la modifiquen, sustituyan o reemplacen...".

La norma de cita, apoyada a nivel constitucional en el artículo 19, tiene por objeto asegurar el derecho a ~~la privacidad e intimidad de los contribuyentes~~, en cuanto

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

a la información que éstos proporcionan al Organismo recaudador en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El derecho a la intimidad reflejado aquí en el secreto fiscal, además de proteger una zona de reserva personal, evidentemente alcanza también la información comercial que incluye la relativa a la actividad y a los secretos empresarios.

De la norma bajo cita surge entonces que las declaraciones juradas, manifestaciones, informes, expedientes, notas, papeles de trabajo y demás documentación que los responsables o terceros presenten ante la AFIP son, en principio, privados y se encuentran amparados por el secreto fiscal., aspirando así a garantizar a los responsables tributarios que el cumplimiento de sus obligaciones ante el organismo recaudador no les generará compromisos de otro orden.

En tal sentido se ha dicho que los datos que resultan amparados por el secreto fiscal son datos que las personas tienen derecho a preservar dentro de la esfera de lo privado, pero que el régimen jurídico, estableciendo una limitación razonable al derecho a la preservación de la intimidad, permite conocer a la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (conf. Díaz Sieiro, Horacio, citado por Bertazza Humberto J, Ley 11.638 de procedimiento tributario comentada, 1ra ed., Bs.As., La Ley, 2019, pág. 722 y sig., el resaltado es propio).

Mediante dicho instituto "**...se trata de asegurar la confidencialidad de ciertas informaciones, de manera tal que los contribuyentes tengan la certeza absoluta que lo declarado en el ámbito tributario no será informado a ninguna persona, aventando el riesgo de difundir secretos comerciales, industriales, etc. Lo cual ha permitido**

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

sostener a nuestro máximo tribunal que se trata pues, de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta pública... la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que uno de los principios objetivos que persiguen las disposiciones que instituyan **el carácter secreto de las manifestaciones y declaraciones juradas tributarias es el de asegurar que los informes presentados ante la Dirección General Impositiva no pueden ser usados como "armas" contra el contribuyente que los formuló** -el destacado me pertenece- (Teresa Gómez - Carlos María Folco; "Procedimiento Tributario", Editorial La Ley, Buenos Aires, año 2020).

Conforme lo ha expresado recientemente el Máximo Tribunal de la Nación, el secreto fiscal tiene como propósito *"amparar al contribuyente y darle la seguridad de que sus manifestaciones no podrán llegar a conocimiento de terceros ni servir de armas contra él (Fallos: 191:253; 193:109; 196:575, entre otros)"*, agregando que *"el objeto sustancial del artículo 101 de la ley 11.683 "ha sido llevar la tranquilidad al ánimo del contribuyente con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule ante la Dirección General Impositiva será secreta. Se trata, pues, de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la renta pública" (Fallos: 248:627, considerando 5°)"* (CSJN, sentencia del 17.06.2021 en autos "FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN -M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento", considerando 8°, el resaltado es propio). Se colige además de **ello que el secreto fiscal ha sido instaurado en favor del contribuyente y no en**

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

**beneficio del Fisco**, tal como expresamente se ha plasmado también en el fallo de cita.

Se ha sostenido también doctrinariamente que *"...La información de los contribuyentes que reúne la AFIP está protegida por el secreto fiscal. El ente recaudador está obligado a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona, organismo o entidad alguna..."* (Mariano Borinsky; 20.07.2020; "El secreto Fiscal: ese divino tesoro"; Diario Perfil.com).

Asimismo *"...Se ha expresado que el secreto que protege la información que el contribuyente aporta al Fisco es uno de los derechos personalísimos del individuo que, en la esfera fiscal, se extiende a las empresas y sociedades que también tienen un ámbito privado y particular protegido por las leyes de la competencia comercial, registros de la propiedad institucional, entre otros..."* (Op. citada).

También a nivel normativo en el ámbito nacional, debo señalar que la instrucción general AFIP 8/06 de fecha 30.06.2006, modificada el 11.10.2006 y actualizada por Disposición 98/2009, estableció las pautas que las áreas dependientes de la AFIP deben tener en cuenta a fin de evaluar la procedencia o rechazo de solicitudes de información efectuadas por terceros.

Sobre los alcances del secreto fiscal se dispone que *"la interpretación de las excepciones al deber de confidencia establecido por [el artículo 101 de la ley 11.683], debe realizarse con alcance restrictivo"* y que *"salvo las excepciones taxativamente previstas en esta instrucción general, las áreas intervinientes deberán resolver negativamente todo requerimiento"* que involucre dicha información.

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

La normativa aludida prevé ciertas excepciones al secreto fiscal y entre la referidas a los entes y sujetos requirentes, la instrucción AFIP 8/06 contempla el suministro de información amparada por el secreto fiscal al *"Ministerio Público Fiscal y unidades específicas de investigación que lo integren siempre que: (...) Mediare orden del juez competente, o (...) lo requiera el propio fiscal interviniente cuando: a) Tenga a su cargo la dirección de la investigación, conforme a lo previsto en los Artículos 180 segundo párrafo y 196 primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación o, b) se trata de denuncias formuladas por este organismo"* (pto. 3.3.1.5, según modificación introducida por la instrucción general AFIP 12/06).

En similar sentido la Disposición N° 98/2009 de fecha 27 de febrero de 2009 prevé como excepciones al secreto fiscal en virtud del sujeto requirente, que podrá suministrarse la información cuando el requerimiento sea cursado por *"...El Ministerio Público Fiscal y unidades específicas de investigación que lo integren, mediando orden de juez competente o requerimiento del propio fiscal interviniente. En el último caso, cuando: a) Tenga a su cargo la dirección de la investigación, conforme a lo previsto en los Artículos 180 segundo párrafo y 196 primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación o, b) se trata de denuncias formuladas por este organismo..."*.

### **III.- Funciones y facultades del Ministerio Público Fiscal.**

Plasmado el marco normativo y previo ingresar al caso concreto de autos, estimo también pertinente -a fin de obtener una visión integral del asunto puesto a consideración- hacer una breve alusión a la función y ~~facultades del Ministerio Público Fiscal.~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Conforme lo establece la Constitución Nacional en su artículo 120 *"el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República"*.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal prevé que este es *"el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes"*.

Si bien dichas normas dejan plasmada la función eminentemente acusadora del Ministerio Público Fiscal -la cual comparte en cierto modo con la querella particular-, dejan también reflejado que su rol trasciende hacia objetivos superadores y prioritarios de la administración de justicia.

Se advierte así que el proceder del Representante del Ministerio Público Fiscal **debe estar por mandato legal guiado en el respeto de la legalidad y la justicia, debiendo actuar de modo objetivo en procura de un proceso justo y respetuoso de las garantías constitucionales.**

Cabe hacer nueva alusión a la Ley Orgánica del Ministerio Público que, al enumerar en su artículo 9 los principios funcionales que deben guiarlo, hace expresa mención en su inciso c) al respeto por los derechos humanos, estableciendo que *"desarrollará su actuación de acuerdo con los principios, derechos y garantías*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

*establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones internacionales, respetando los derechos humanos y garantizando su plena vigencia". Asimismo, al referirse a la Objetividad -inciso d)-, la norma indica que "requerirá la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado".*

En el punto, atinado resulta invocar a Lucila E. Larrandart, quien con cita a Maier señala que en la construcción del Estado de Derecho que se desarrolló con punto de partida en la revolución francesa el ministerio público fue construido como órgano objetivo e imparcial con la tarea de colaborar en la averiguación de la verdad y actuar el derecho penal material, con la obligación de proceder tanto en contra como a favor del imputado, **como custodio de la ley**. (Lucila E. Larrandart, "La función del Ministerio Público y la Justicia", Revista de Pensamiento Penal, Doctrina, 5/2/2017).

Asimismo, invocando a Clariá Olmedo, expresa la autora de cita que si el Ministerio Fiscal es un órgano de justicia, el ejercicio de sus poderes legales debe estar organizado con todos los recaudos propios de una función de esa jerarquía. En eso ha de radicar su prestigio y la confianza de los ciudadanos en los funcionarios. **No son órganos de persecución sino de justicia**; no procuran el castigo a ultranza (a outrance) de quien sea sometido a proceso, sino la reconstrucción del orden alterado que más de una vez ha de conseguirse con la absolución. De ahí que ha de cumplir satisfactoriamente su cometido legal cuando ejercita la acción en sentido desincriminador o cuando no obstante ser el órgano acusador, evita la iniciación del **proceso**.

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Por su parte, la CNCP., Sala I, 20-12-2005, en autos "Cho Joon Hee s/ Rec. de Casación" (c.6449), reg. 8408, expone su postura en relación al modo de actuar del fiscal, señalando que *"...la ley fundamental al igual que lo hacen la ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal de la Nación ha encomendado a los representantes del Ministerio Público Fiscal como función esencial, no sólo la de excitar la actuación del órgano jurisdiccional del Estado sino también la de velar ya que ello necesariamente incumbe a los intereses generales de la sociedad para que el proceso penal por él instado se desarrolle en un marco de respeto a las normas que lo regulan. De ello se sigue que más allá de su posición de parte en sentido formal, por cierto en el expediente judicial, en escalón más elevado aún, se encuentra la de garante de la legalidad del proceso (...)* En realidad, si bien es cierto que el fiscal resulta la contraparte formal del imputado, esa posición que adquiere en el marco del proceso no lo revela sobre todo cuando el acto cuya validez constitucional se discute en autos se emparenta más con la defensa que con la misión acusatoria de una actuación conforme a la ley..." (el resaltado es propio).

En cuanto a las facultades que, tanto la Ley 27.148 y el propio Código Procesal Penal de la Nación, le otorgan a los representantes del Ministerio Público Fiscal, cabe consignar que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que **"...Los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los organismos privados y a los particulares...** Los organismos públicos y las fuerzas de seguridad deberán prestar la ~~colaboración y diligencias que les sean requeridas,~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

*adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y destinando a tal fin el personal y medios necesarios a su alcance...”, el destacado me pertenece.*

Por su parte, el Código de Rito, en el art. 212 reconoce a los representantes del Ministerio Público Fiscal la facultad para citar a testigos, requerir los informes pertinentes y útiles, disponer todas las medidas que considere necesarias en el ejercicio de sus funciones y practicar las inspecciones de lugares y cosas con la debida orden judicial de allanamiento en caso de ser necesario. Asimismo, establece que las partes le podrán proponer los actos procesales y obtención de pruebas en cualquier momento de la investigación, las cuales se llevarán a cabo si se consideraren pertinentes y útiles.

Asimismo, el art. 213 del CPPN. establece los límites a las atribuciones concedidas a los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes deberán pedir autorización al juez, bajo pena de nulidad, para llevar a cabo los siguientes actos: “a) La recepción de la declaración del imputado (artículo 294); b) Toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado, con excepción de los delitos cometidos en flagrancia (artículo 284) o de suma urgencia (artículos 281, 282), en cuyo caso nunca podrá superar las seis (6) horas. También deberá requerir inmediatamente, cuando corresponda, la cesación de las mismas; c) La producción de los actos irreproducibles y definitivos; d) Toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a la suspensión de la persecución penal o al sobreseimiento del imputado; e) Todo otro acto no comprendido en el artículo 212, y que el Código Procesal Penal sólo faculte practicar a un juez.

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Dichas facultades, conforme surge de los artículos 120 de la Constitución Nacional y 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, deberán ser siempre ejercitadas en un riguroso respeto de la ley y la Justicia, habiendo sido instaurado el Ministerio Público Fiscal precisamente como el custodio de dichos preceptos.

#### **IV.- Caso concreto:**

Expuestos tales lineamientos conceptuales y normativos corresponde en lo que sigue ingresar al análisis del caso concreto puesto a consideración del Tribunal.

**1.-** Avocada a ello, debo comenzar respondiendo al cuestionamiento sobre los alegados vicios de fundamentación de la resolución recurrida. Al respecto, considero que el cuestionamiento deriva sólo del disenso de los recurrentes respecto de la decisión arribada, sin que la misma se encuentre inmotivada, sino que, por el contrario, el Instructor ha brindado los argumentos para la justificación de su razonamiento, sin perjuicio que éste no sea compartido por las partes apelantes.

La resolución cuestionada reúne todos y cada uno de los requisitos formales y sustanciales que la califican como un acto jurisdiccional válido, habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido, ello sin perjuicio que la solución a la que se arribó le pueda causar un eventual agravio a las partes.

Para formular un planteo como el que se pretende, que implicaría la arbitrariedad de la resolución, no basta disentir con la valoración efectuada por el Juez actuante, sino que debe demostrarse acabadamente que aquél se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente, brindando fundamentos aparentes o adoptando conclusiones ~~que no resulten derivación razonada del derecho vigente.~~

*Fecha de firma: 23/06/2022*

*Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara*



#35895191#332231179#20220623124311281





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

En el caso concreto, aunque las partes recurrentes no compartan las conclusiones arribadas, entiendo que se ha realizado un suficiente análisis de los extremos planteados y se han brindado los argumentos en base a los cuales el Juez interviniente adoptó su decisión, excluyendo así la tacha de arbitrariedad y vicios de motivación atribuidos a la resolución judicial.

De la lectura del auto recurrido, surge cuáles han sido las razones que llevaron al Juez a decidir como lo hizo, cumplimentando de esta forma, no sólo lo establecido por el artículo 123 del Código Procesal Penal, sino también con la razonabilidad inmanente del principio republicano de gobierno.

Asimismo, se ha permitido a las partes conocer efectivamente cuales son las razones que tuvo el Juez para resolver, dando la posibilidad de interponer recurso para garantizar la tutela judicial efectiva. De la misma forma, se ha permitido a esta Cámara comprender los motivos que fundamentan el auto recurrido, posibilitando la revisión que corresponde como Tribunal de grado sobre la procedencia o improcedencia de lo decidido.

En concreto, reitero los cuestionamientos efectuados por las partes apelantes respecto de la motivación y validez de la resolución deriva en definitiva del disenso respecto de la decisión adoptada por el Juez de primera instancia, lo que será puntualmente a continuación materia de análisis para determinar el acierto o no de lo decidido.

2.- Por otra parte, atento las implicaciones que traería aparejado, debo también referirme al planteo de inconstitucionalidad de la Instrucción General de APIP 8/2006 y sus modificaciones que ha sido efectuado por el

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

Representante del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de informar oralmente ante esta Alzada.

Al respecto, cabe en primer lugar dejar sentado que revisado el escrito de apelación interpuesto por dicha parte no surge que tal cuestión hubiera sido parte de los puntos de agravio que motivaron la interposición del recurso. En efecto, más allá de los cuestionamientos dirigidos contra la fundamentación del auto apelado y los fundamentos de fondo alegados para sostenerla y expresar sus discrepancias con lo resuelto, la parte apelante no invocó la inconstitucionalidad de la Instrucción General 8/2006 ulteriormente introducida en la audiencia oral.

En orden a la introducción de nuevos agravios no expresados al interponer el remedio recursivo, debo indicar que a tenor de lo prescripto por el artículo 454 del CPPN. en cuanto dispone que *"...se otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas que formularen, quienes podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso..."* (el destacado me pertenece), no correspondería atender los nuevos motivos introducidos por dicha parte recurrente en la oportunidad de informar ante esta Cámara, en tanto se extendería indebidamente la competencia abierta con motivo del recurso.

Al respecto, el art. 445 del mismo cuerpo legal establece *"...el recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio..."*.

En razón de ello, no corresponde por regla abordar cuestiones novedosas introducidas en oportunidad de ~~informar, en tanto la competencia de esta Cámara Federal de~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

Apelaciones solamente se encuentra abierta al análisis de los puntos de agravio deducidos al momento de recurrir.

Asimismo, por tratarse la pretensión de inconstitucionalidad de una cuestión sobre la cual el Juez Instructor no se ha pronunciado, tampoco resultaría procedente que esta Alzada se pronuncie al respecto en esta etapa procesal, a fin de garantizar el derecho al recurso y la garantía de la doble instancia judicial.

No obstante ello, atento la naturaleza del planteo no puedo dejar de señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en orden al control de constitucionalidad de las leyes que compete al Poder Judicial de la Nación, ha dicho que *"...la inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma trascendencia y gravedad institucional (Fallos 299:393; 301:904 y 1062 y 311:394), ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, es decir, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que, en principio, opera plenamente y obliga a ejercer aquella extrema atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable; de lo contrario se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo que haga con la armonía que se exige para el cumplimiento de los fines del proceso, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos 226:668; 242:73; 285:269; 300:241; 314:424, entre otros).*

Asimismo, con arreglo a jurisprudencia de la ~~Corte Suprema de Justicia de la Nación~~, el interesado en la

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, qué gravamen irreparable le causa, probando además que ello ocurre en el caso concreto, para evitar así juicios abstractos o meramente académicos (Fallos: 256:602; 307:531 y 1656; 310:211; 314:407 y 495; 316:687; 321:221, entre otros), resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos 289:238; 314:495; 327:4023; 328:4282, entre otros).

Es sabido, además, que frente a un planteo de inconstitucionalidad de una norma debe imperar un criterio sumamente restrictivo, toda vez que esa decisión -como se dijo- *"...es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como una última ratio del orden jurídico..."* (Fallos 200:180; 247:387; 249:51; 307:531, entre otros).

En esta línea, pese lo alegado por el Fiscal Federal interviniente, quien ha tildado a la Instrucción General AFIP N° 8/2006 de "arcaica", entiendo que no ha logrado demostrarse de qué forma dicha Instrucción y sus modificaciones ha producido una afectación de alguna garantía constitucional, cuya consecuencia deba ser la declaración de la inconstitucionalidad, más aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete de la Constitución Nacional, no sólo no la declaró en anteriores oportunidades que tuvo oportunidad de valorarla, sino que ha resuelto casos análogos conforme los lineamientos que aquí la Suscripta ha valorado.

Concretamente en los ya citados autos "FIA (Expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN -M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento", el Máximo Tribunal de la Nación resolvió con arreglo a ~~dicha normativa, revocando la sentencia de la Sala I de la~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que había declarando la inaplicabilidad de la Instrucción General AFIP n° 8/06 (modificada por su par n° 12/06-Anexo I) y la Disposición AFIP n° 98/09 al organismo actor -FIA-.

En virtud de lo expuesto, considero que corresponde no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la Instrucción General de APIP 8/2006 y sus modificaciones efectuado por el Representante del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de informar oralmente ante esta Alzada.

**3.-** Dejada a salvo la validez y eficacia procesal del auto bajo recurso y dispuesto lo que precede en relación al planteo de inconstitucionalidad de la Instrucción General AFIP N° 8/2006, debo en lo que sigue ingresar al análisis específico de fondo y definir la procedencia o no de la nulidad declarada en primera instancia respecto la incorporación y valoración de los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos obrantes a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151 y de sus actos consecuentes.

**a)** En primer término, en relación al contenido de los informes cuestionados, debo señalar que se está frente a información sumamente sensible referida a contribuyentes y obtenida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en ejercicio de sus funciones, encontrando por tanto amparo en el secreto Fiscal.

En efecto, tal como surge del propio artículo 101 de la Ley 11.683 antes transcripto, las declaraciones juradas, manifestaciones, papeles de trabajo y documentos e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP son secretos, estando el Organismo recaudador obligado

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

a mantener en dicho estado la información obtenida en el ejercicio de sus funciones propias.

Por su parte, el Anexo a la Disposición N° 98/09 (AFIP) prevé como principio general que *"Toda información de contenido económico-patrimonial referida a contribuyentes o responsables obrante en esta Administración Federal, obtenida en el marco de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se encuentra amparada por el instituto del secreto fiscal contemplado en el Artículo 101 del citado texto legal"*.

Entiendo así que la información aportada se encuentra bajo el amparo del Secreto Fiscal, debiendo resaltar, además, que en el presente caso la información aportada no sólo concierne a la persona del denunciante, sino que se extiende hacia terceros contribuyentes, conteniendo datos específicos relativos a su actividad económica, societaria y patrimonial, entre otra.

En esta consideración de la información suministrada como comprendida bajo la tutela del Secreto Fiscal, no puedo dejar de hacer alusión a las reiteradas advertencias efectuadas por el propio Ente recaudador en oportunidad de responder a los sucesivos requerimientos de información, considerando la Suscripta que aquellos señalamientos ponen aún más en evidencia que los datos revelados se encontraban bajo el expreso amparo del secreto fiscal.

Concretamente, a fs. 36 de autos principales surge que en la contestación de oficio presentada con fecha 5 de septiembre de 2018 por la Jefa (int) de la Sección Penal Tributario – División Jurídica de AFIP-DGI, Dra. María Elisa Diez, se comunicó que *"la información requerida, se encuentra amparada por el secreto fiscal, y se deja constancia que el organismo o autoridad receptora*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

*de la misma deberá cumplir con el deber de confidencialidad previsto en el segundo párrafo del Artículo 101 de la Ley 11683".*

Ello debe leerse junto con la Nota dirigida a Dicha División Jurídica por el Jefe de la División de Investigación, Cont. Púb. Pedro Mario Majul, quien dejó expresa constancia que *"...la presente información se brinda bajo las prevenciones del Secreto Fiscal. Asimismo es de resaltar que tanto el oficio recibido de la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba no manifiesta expresamente el relevamiento del Secreto Fiscal para el cumplimiento de la manda y que, en el mismo sentido, la Nota N° 6475./18 (DV JUCO/ S P T) tampoco aclara si el oficio del asunto se incluye dentro de las excepciones previstas para lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 11683 t.o. vigente"* (ver fs. 46 del principal).

Asimismo, a fs. 87 de autos principales surge que al remitirse la información solicitada en respuesta al oficio recepcionado por AFIP el 19/09/18, la Jefa interina de la Sección Dictámenes y Sumarios II, como recaudo de ley, hizo expresa transcripción del primer y tercer párrafo del artículo 101 de la Ley 11.683.

En igual sentido, en la contestación de oficio de fecha 9/8/19, obrante a fs. 121 del principal, la Dra. Diez deja nuevamente a salvo que *"la documentación aportada, se encuentra amparada por el secreto fiscal, y se deja constancia que el organismo o autoridad receptora de la misma deberá cumplir con el deber de confidencialidad previsto en el segundo párrafo del Artículo 101 de la Ley 11683."*

Por su parte, a fs. 151 la División de Investigación, dejó constancia en la respuesta a la Nota N° ~~6318/2019~~ que *"...la presente información se brinda bajo*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

*las prevenciones del Secreto Fiscal. Asimismo es de resaltar que tanto el oficio recibido de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba no manifiesta expresamente el relevamiento del Secreto Fiscal para el cumplimiento de la manda y que, en el mismo sentido, la Nota N° 6318./19 (DV JUCO/ S P T) tampoco aclara si el oficio del asunto se incluye dentro de las excepciones previstas para lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 11683 t.o. vigente" (ver fs. 46 del principal).*

Asimismo, más allá de las explicaciones brindadas por la parte querellante particular en oportunidad de informar oralmente ante esta Alzada, abona también la consideración de la información aportada como amparada por el secreto fiscal la stampa del sello de agua con la expresa leyenda "INFORMACIÓN AMPARADA CON SECRETO FISCAL".

De tal modo, considero acreditado que la información aportada comprendía datos sensibles de contribuyentes obtenidos por el Organismo recaudador en ejercicio de sus facultades propias de fiscalización y que como tal gozaba de las prerrogativas del secreto fiscal, habiendo sido ello expresamente reconocido por el Organismo recaudador, conforme se plasmara previamente.

No abunda agregar en este punto que al solicitar el Ministerio Público Fiscal, con fecha 16 de agosto de 2019, el levantamiento del Secreto fiscal para los actos posteriores (fs. 202/vta.), requirió además la convalidación de la información previamente incorporada a su propia instancia y que *"la Afip considera amparada bajo el secreto fiscal"*.

De tal modo, no caben dudas que la información aquí aportada y cuestionada ingresaba dentro del ámbito de protección del secreto fiscal.







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

**b)** Definido ello, debo también señalar que más allá de la trascendencia de las garantías que resguardan al contribuyente por medio del secreto fiscal, dicho precepto tampoco escapa a la consideración antes referida sobre que **no hay derechos absolutos**, sino que éstos están sujetos a las leyes que los reglamenten y su ejercicio debe garantizarse siempre que no impliquen lesión a otros derechos también protegidos.

En efecto, se ha sostenido que *"...El derecho a la intimidad no es absoluto, encuentra su límite legal siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen..."* (Fallos 319:71).

Asimismo, puntualmente en lo concerniente al secreto fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN -Mº Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento" Expte. CAF 30623/2010, sostuvo que **"...el secreto fiscal no se exhibe como un condicionamiento irrestricto y absoluto para el Ministerio Público Fiscal..."** (el destacado es propio).

En materia tributaria se ha dicho, además, que *"... resulta necesario evaluar la información presentada, o que omitió presentar, el contribuyente ante la AFIP con el efecto de valorar los hechos que eventualmente terceros pongan en conocimiento de un representante del MPF (o aquellos hechos de los que aquél haya tomado conocimiento en ocasión y en ejercicio de sus funciones) y que tuvieran cierta entidad aunque sin alcanzar los estándares exigidos por el artículo 176 del CPPN. Por esta razón, **el secreto fiscal no puede alzarse por sobre los intereses constitucionales que al MPF le toca proteger: la legalidad***

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

**y los intereses generales de la sociedad..."** (Mariano Borinsky; 20.07.2020; "El secreto Fiscal: ese divino tesoro"; Diario Perfil.com) -el destacado me pertenece-.

Ahora bien, no obstante que como dije no existen derechos absolutos y que el secreto fiscal no escapa de dicha caracterización, admitiendo el ordenamiento legal aplicable supuestos de procedencia de requerimientos de información y excepciones al deber de confidencia, cabe también señalar que como se indicó previamente la interpretación de dichas excepciones debe ser de carácter restrictivo.

En efecto, en la materia vinculada al presente decisorio, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN -Mº Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento" Expte. CAF 30623/2010, dejó sentado que *"la instrucción general AFIP 8/06 establece las pautas que las área dependientes de la AFIP deben tener en cuenta a fin de evaluar la procedencia o rechazo de solicitudes de información efectuadas por terceros. Sobre los alcances del secreto fiscal dispone que 'la interpretación de las excepciones al deber de confidencia establecido por [el artículo 101 de la ley 11.683], debe realizarse con alcance restrictivo' y que 'salvo las excepciones taxativamente previstas en esta instrucción general, las áreas intervinientes deberán resolver negativamente todo requerimiento' que involucre dicha información"*.

Además, por aplicación del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos) se debe priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

que caracteriza al derecho penal como la *ultima ratio* del ordenamiento jurídico.

Asimismo, conforme nuestro bloque de convencionalidad, corresponde aplicar al concreto el principio "*pro homine*", del que se deriva la necesidad de efectuar la interpretación que acuerde mayores derechos al individuo frente al poder del Estado, representado en los distintos órganos de actuación.

La consagración de dicho principio deja establecido que se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones a su ejercicio. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. (Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios para la hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos", en AAVV, "La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales", CELS, Buenos Aires, 1998, pág. 163).

En estos términos se ha expresado nuestro Máximo Tribunal en autos "Acosta", donde precisamente se sostuvo que el principio de legalidad "*...exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal...*" (CSJN. "Acosta" 23.04.2008).

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

c) Dicho ello y trasladándolo al caso concreto de autos donde se cuestiona la decisión del Juez de primera instancia sobre la necesidad o no de una disposición en concreto que releve del secreto fiscal, soy de la tesitura que de acuerdo a esta línea de interpretación restrictiva y en función del principio *pro hómine*, **para superar la valla o manto de protección que ampara constitucionalmente al individuo a través del secreto fiscal, el mismo debe ser levantado de forma expresa mediante un acto debidamente fundado**, para evitar así posibles arbitrariedades e intromisiones indebidas por parte de los órganos del Estado.

Cabe citar nuevamente aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema antes invocada donde luego de señalarse que el secreto fiscal no constituye un condicionamiento irrestricto y absoluto para el Ministerio Público Fiscal, se expresó que “...en efecto, como ha quedado establecido, entre las excepciones previstas, aquel órgano constitucional -y sus unidades específicas de investigación- **pueden acceder a información amparada por el secreto fiscal siempre que medie orden de juez competente, o lo requiera el propio fiscal interviniente** cuando tenga a su cargo la dirección de la investigación conforme a lo previsto en los artículos 180 segundo párrafo y 196 primer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación...”.

Sobre este punto, destacada doctrina ha dicho que “...el secreto fiscal no tendrá vigencia, o mejor dicho, **podrá ser levantado**, cuando el requerimiento de información sea formulado por un juez competente, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Defensoría del Pueblo, las cámaras del poder legislativo o entes recaudadores ~~subnacionales entre otros...~~” (Mariano Borinsky, 20.07.2020;

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

"El secreto Fiscal: ese divino tesoro"; Diario Perfil.com)-  
el destacado me pertenece-.

Expresa también el doctrinario de cita que *"En el ámbito nacional, por la Instrucción General AFIP 8/06 (en adelante IG) de fecha 30/06/2006 se reguló bajo qué circunstancias la AFIP debería brindar información que se encuentra amparada por el secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683).*

*Por el punto 3.3.1.5 de la IG 8/06 el MPF y las unidades específicas de investigación que lo integren, sólo podrán solicitar aquella información mediando causa abierta y orden de juez competente o del propio fiscal interviniente, en el supuesto previsto en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), que es cuando el fiscal requiere el inicio de una investigación penal..."* (Op. Cit.) -el destacado es propio-

Agrega luego que *"...Con fecha 11/10/2006 la AFIP modificó el punto 3.3.1.5. de la IG, de manera que el Ministerio Público Fiscal y las unidades especiales de investigación que lo integren podrán requerir información amparada por el secreto fiscal siempre que mediere orden de juez competente (3.3.1.5.1) o lo requiera el propio fiscal interviniente (3.3.1.5.2.) cuando tenga a cargo la investigación (art. 196 del CPPN) o, en la etapa previa, cuando se trate de denuncias formuladas por ese organismo..."*.

Soy de la opinión que el levantamiento del secreto fiscal -que ampara ni más ni menos que el derecho a la intimidad del contribuyente, entre otros principios de raigambre constitucional tales como los de reserva, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso-, debe ser dispuesto de manera **expresa y fundada** ya sea por el Juez ~~interviniente o por el Fiscal~~ **actuante** en caso de haber

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

asumido la investigación, obstando la ausencia de dicho acto procesal la incorporación de la información y su valoración en la causa.

Entiendo que tanto uno como otro deben decidir expresamente el levantamiento del secreto fiscal y considero contrario a la lógica inferir que mientras al juez de la causa se le requiera el libramiento de orden expresa, el fiscal pueda solicitar el acceso a la información sin mediar tal acto, por el solo hecho de tener delegada la instrucción.

Asimismo, dicha disposición debe ser fundada, requisito éste que se exige no solo a los actos del Juez en virtud del artículo 123 del CPPN., sino también a los miembros del Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 69 del mismo cuerpo normativo.

Es dable recordar que resulta de fundamental importancia que todos los actos estructurales del proceso sean fundamentados. Esto implica un control sobre la logicidad del razonamiento y supone corroborar el empleo de los principios clásicos de la sana crítica en su aspecto puramente formal, que del acto surja la manifestación de las razones de hecho y derecho que justifican el juicio emitido, lo que importa resguardar tanto una garantía en beneficio de los eventuales acusados como así también para el propio Estado, en el sentido que refuerza una correcta administración de justicia.

Es necesario señalar que la fundamentación exige que el razonamiento efectuado sea claro, completo, coordinado entre los diversos argumentos (Conf. Olsen A. Ghirardi y Colaboradores "El Siglo XXI y el razonamiento forense", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, t. III, págs. 273/278).





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

Al respecto, tal como lo expusiera la Suscripta al resolver los autos "GIMENEZ" con fecha 8-6-16, cabe referir que *"los principios constitucionales de la defensa en juicio y la forma republicana de gobierno exigen que los fallos judiciales tengan fundamentación suficiente y objetiva."*

*Si bien la Constitución Nacional no ha impuesto de modo explícito el requisito de motivar las sentencias, el art. 18 que establece "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso", debe entenderse, en dicho aspecto, en combinación con el carácter republicano de gobierno.*

*El sistema republicano de gobierno impone, entre otros aspectos, la necesidad de asegurar la publicidad de las decisiones judiciales en tanto ello permite el control de que las mismas y como condición de validez "sean conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa" (C.S.J.N. Fallos 238:550; 244:521; 249:275 entre otros).*

En esa tónica, se ha afirmado también que los actos del fiscal pueden hallarse sujetos a control y que pueda hasta implicar un examen sobre la razonabilidad y legalidad de lo dictaminado y que "...con lo actuado o dictaminado, a los jueces les queda reservado, junto al ineludible control de constitucionalidad, un examen sobre la fundamentación del pedido en términos similares al del art. 123..." (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray. Código Procesal Penal de la Nación. 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2006. P. 251).

Resultado de ello se presenta entonces la exigencia de fundamentación de las decisiones, respondiendo en definitiva a la necesidad de que el proceso penal sea ~~una herramienta o instrumento idóneo~~ para alcanzar la

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

efectiva y real tutela por parte del Estado sobre los intereses en conflicto.

Ahora bien, en el caso de autos se advierte que ni el Juez interviniente ni el representante del Ministerio Público Fiscal -quien por momentos tuvo delegada la investigación en virtud del art. 196 del CPPN- dispusieron expresa y fundadamente el levantamiento del secreto fiscal para acceder a la información solicitada mediante los sucesivos oficios, tornando de tal modo ilegítima su obtención.

Entiendo que si bien, tanto la denuncia inicial como los actos posteriores de instrucción podrían eventualmente haber tenido aptitud suficiente para tornar procedente el levantamiento del secreto fiscal que amparaba los datos incluidos en los informes remitidos por AFIP, lo cierto es que ello no fue reflejado ni dispuesto expresamente en las actuaciones, de modo que tornara válida la incorporación de los informes cuestionados.

No surge tampoco de las constancias de la causa que al solicitarse los informes se hayan esgrimido razones por las cuales se considerase excepcionado el caso del secreto fiscal y que hicieran procedente su levantamiento, ni tampoco se hizo remisión a ningún elemento objetivo de la causa que pudiera fundar una decisión de tal magnitud.

Cabe aludir nuevamente aquí a la Nota dirigida a la División Jurídica de AFIP por el Jefe de la División de Investigación, Cont. Púb. Pedro Mario Majul, quien luego de dejar constancia que la información se brindaba bajo las prevenciones del Secreto Fiscal, resaltó detalladamente *"que tanto el oficio recibido de la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba no manifiesta expresamente el relevamiento del Secreto Fiscal para el cumplimiento de la manda y que, en el mismo sentido, la Nota N° 6475./18 (DV JUCO/ S P T)*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

***tampoco aclara si el oficio del asunto se incluye dentro de las excepciones previstas para lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 11683...*** (fs. 46).

Idéntica consideración surge de la respuesta de la División de Investigación a la Nota N° 6318/2019 (fs. 151).

La falta de relevamiento expreso del secreto fiscal se verifica en el concreto hasta el efectivo levantamiento dispuesto por primera vez en la causa mediante auto de fecha 21 de agosto de 2019, a instancias del Representante del Ministerio Público Fiscal.

Nótese así que fue el propio Fiscal Federal interviniente quien advirtió a fs. 202/vta. la omisión de levantamiento del secreto fiscal respecto de información relacionada con el denunciante y que era considerada por AFIP como amparada bajo el mismo, solicitando expresamente la convalidación ex-post, es decir con efecto retroactivo, de actos ya cumplidos.

No merece explayarse en demasía sobre que si bien ciertos vicios relativos de nulidad pueden ser subsanados, teniendo como eje de ponderación la entidad del perjuicio causado y la afectación a los intereses de la parte, distintos resultan casos como el que aquí se presenta, donde el vicio de nulidad invocado ostenta carácter de absoluto e implica una degradación plena del debido proceso y de los demás derechos de raigambre constitucional a los que se ha hecho referencia previa como objeto de protección del secreto fiscal. No puede en tales supuestos admitirse como válida una convalidación o rectificación del trámite ya cumplido, ni borrar las consecuencias ya causadas.

Cabe señalar en este punto que la vulneración de garantías constitucionales conlleva por sí misma un ~~perjuicio intolerable,~~ no sólo para el particular

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#2022062312431281

destinatario de la misma, sino también para el sistema jurídico en su conjunto. Ello sin desprecio de las demás consecuencias puntuales y perjuicios concretos derivados de para cada una de las partes a raíz de las inconsistencias señaladas y que en el concreto se identifican con graves afectaciones al patrimonio, a la intimidad e incluso a la libertad.

Retomando la línea argumental de este pronunciamiento, reitero que la disposición de una medida de tal entidad como el levantamiento del secreto fiscal debió ser dispuesta de manera **expresa y fundada** por el Juez que intervino al inicio de las actuaciones o por el propio Fiscal Federal actuante una vez asumida la investigación, circunstancias estas que no se corroboran en autos.

No se desconoce la posibilidad de franquear el secreto fiscal, ni la facultad del Ministerio Público Fiscal de obtener en ciertos casos acceso a información recogida a dicho amparo, pero para hacer valer dicha prerrogativa la misma debe ser legalmente ejercida por quien tiene aptitud para hacerlo, circunstancia que, como dije, no se ve reflejada en autos. Así, el obstáculo del secreto fiscal podría haber sido debidamente superado mediante su relevamiento expreso, sin que se advierta tampoco urgencia para proceder sin disponerlo, en tanto la información se encontraba resguardada ante AFIP.

Cabe destacar en orden a ello que la averiguación de la verdad no es un valor absoluto dentro del proceso penal, sino que tiene como límite infranqueable las reglas constitucionales y procesales que regulan la persecución penal. De este modo, las normas que reglamentan las facultades de injerencia del Estado en la recolección de prueba que afectan derechos individuales (como el ~~allanamiento, el registro domiciliario, el secuestro,~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

etc.), operan como garantías del ciudadano y, asimismo, funcionan como autolimitaciones para el Estado, quien verá restringidas sus facultades en la actividad persecutoria (en tal sentido, ver: Maier, Julio B., Derecho procesal penal, Tomo III, 1da Ed., Bs.As., Editores Del Puerto, 2011, pág. 119).

En tal sentido, si bien la averiguación de la verdad constituye una meta general del procedimiento, ella cede *"hasta tolerar la eventual ineficacia del procedimiento para alcanzarla, frente a ciertos resguardos para la seguridad individual que impiden arribar a la verdad por algunos caminos posibles, reñidos con el concepto de Estado de Derecho"*.

De tal modo, aún cuando la medida fuera procedente y se reconociera la facultad para requerir la información, la misma debe estar reflejada en una disposición fundada en concreto que releve del secreto, debiendo tenerse especial cautela en supuestos como el que aquí se trata, donde al requerirse los informes lo único con que se contaba era con los dichos del denunciante, sin que ninguna investigación se encontrara previamente en marcha, **siendo evidente el riesgo de vulnerar derechos personalísimos de otros contribuyentes amparados constitucionalmente.**

No escapa en relación a ello que nuestro Máximo Tribunal ha dicho que *"...si bien esta Corte ha atenuado el rigorismo de la prohibición legal establecida por el artículo 101 de la ley 11.683, lo ha sido en los casos en que el propio autor, y en cuyo interés ha sido establecido el secreto de las manifestaciones, hubiera pedido o consentido expresamente que se traiga como prueba en el juicio seguido contra terceros, otros que el fisco, y aún ~~así a condición de que su declaración no contenga datos~~*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

*referentes a otros contribuyentes (Fallos: 237:355 y precedentes allí citados). El secreto fiscal se estableció en beneficio del contribuyente o de terceros que podrían verse perjudicados por su revelación y no del Fisco, a quien solo interesa la recaudación cabal del impuesto (Fallos: 193:109)...” -“FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN -Mº Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento” Expte. CAF 30623/2010- (el resaltado es propio).*

En función de todo lo considerado, comparto con el Juez de primera instancia que la información amparada por el secreto fiscal requiere de disposición expresa y fundada que habilite su levantamiento en resguardo de las garantías constitucionales en las que se funda dicho secreto fiscal, tales como el resguardo del principio de reserva, legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica.

De acuerdo a ello, estimo que la incorporación de los informes cuestionados y de los actos que sean su consecuencia no puede ser convalidada en las circunstancias aquí constatadas, siendo entonces de opinión que la nulidad dispuesta por el Juez de primera instancia resulta acertada y debe ser confirmada.

**La regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas,** porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional (CSJN Fallos: 310:1847, 310:2384, 317:1985, entre muchos otros).

Se ha dicho en torno al punto que “[1]a necesidad social de aplicar sanciones para perseguir el delito y resarcir de algún modo a la víctima- cualquiera que fuese ~~la justificación de las penas privativas o limitativas de~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

*los derechos, tales como la libertad- no puede satisfacerse de cualquier manera. Encuentra su límite en el sistema garantista establecido en la Constitución Nacional e impide la utilización de pruebas ilegales. Es, en suma, una aplicación del principio en virtud del cual el fin- el control del delito- no autoriza el empleo de cualquier medio, tal como las pruebas conseguidas violando otros derechos o garantías." (Gelli María Angélica, Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada, 4ta. Ed. La Ley, Bs.As., 2009, pág. 298 y sig.).*

En este sentido, la regla de exclusión probatoria brinda la posibilidad de determinar la validez constitucional de ciertas prácticas ya que es gracias a esta regla de exclusión que los tribunales pueden analizar cuestiones de suma importancia para la vigencia de los derechos individuales. Así lo ha sostenido la Corte Suprema en los precedentes "Montenegro" y "Fiorentino", donde remarcó que aceptar la prueba obtenida en violación a garantías constitucionales equivale a otorgar valor al resultado de un delito y a comprometer la buena administración de justicia (conf. Carrió, Alejandro D., Garantías constitucionales en el proceso penal, 5ta. Ed., Bs. As., Hammurabi, 2008, pág. 314 y 343).

Cabe también consignar que a partir del caso "Rayford" y en numerosos precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que, **si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél** (CSJN Fallos: 308:733)., siendo esto lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado, que impide

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

utilizar tanto la prueba obtenida ilegítimamente como sus inmediatas derivaciones.

De acuerdo a ello, entiendo que una observación racional de lo ocurrido en las presentes actuaciones, respecto a la incorporación de los informes de fs. 34/49, 53/78, 87/93 y 121/151, sin que se haya fundado el levantamiento del secreto fiscal, conlleva a la conclusión invalidante de los mismos y de los actos subsiguientes que sean su inmediata consecuencia.

Debo detenerme en este punto y efectuar una breve referencia a la obtención de los IP e información concerniente a los mismos. Al respecto, considero que no resulta de aplicación al supuesto de autos lo resuelto con fecha 28.12.2020 por esta Alzada en autos **"Incidente de Nulidad en causa "ITURRIA, MATIAS EMANUEL por ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS" (FCB 88747/2018/1/CA1)**, donde lo discutido era concretamente si se trataba o no de datos protegidos por la ley N° 25.326 -Protección de Datos Personales-, llegándose a la conclusión que la dirección IP constituye la identificación de la interfaz en red que permite sindicar cual es el proveedor del servicio de internet y no implica el acceso a datos personales, ni se trata de conocer las comunicaciones de su titular ni las páginas visitadas, por lo que se trataba solamente de datos nominativos posibles de recolectar sin invadir la esfera de intimidad de sus titulares.

Ahora bien, lo cierto es que el análisis del caso que aquí nos convoca excede la cuestión discutida en el precedente de cita, siendo atinado indicar que ahora surge que a la obtención de los referidos IP y datos relacionados a los mismos se llegó a raíz de información amparada por el secreto fiscal y lograda sin el debido levantamiento del mismo, lo cual torna en consecuencia también inválida su

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

consideración e incorporación al proceso, por la regla de exclusión probatoria antes aludida.

En virtud de las consideraciones precedentes, entiendo en definitiva que corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez Federal N° 1 de Córdoba en cuanto dispuso declarar la nulidad de los informes remitidos por AFIP-DGI incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93 y 121/151 de autos y de todos los actos que fueran su consecuencia (conf. art. 101 de Ley 11.683, arts. 18 y 19 de la CN. y arts. 167, 168, 172 y cc. del CPPN.). Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.-

**El señor Juez de Cámara, Dr. Eduardo Ávalos, dijo:**

Que adhiere a las consideraciones y conclusión a la que arriba la señora Juez de Cámara que me precede.

**La señora Juez de Cámara, Dra. Liliana Navarro, dijo:**

I.- Acerca del asunto sometido a revisión en autos, debo señalar que adhiero al rechazo del planteo de nulidad de la resolución apelada por falta de fundamentación (art. 123 del CPPN) y al rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la Instrucción General de AFIP 8/2006 y sus modificaciones.

Asimismo, disiento con la solución propiciada por los señores Jueces preopinantes en cuanto consideran que corresponde confirmar la resolución dictada con fecha 27.10.2021 por el Juez Federal N° 1 de Córdoba que dispuso declarar la nulidad de los informes incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93 y 121/151 de autos principales y de todos los actos que fueran su consecuencia (conf. art. 101 de la Ley 11.683, arts. 18 y 19 de la CN y arts. 167, 168, 172 y cc del CPPN). Por el contrario, estimo que corresponde revocar la resolución apelada. Doy razones.

En primer término cabe reiterar el criterio ~~jurisprudencial de este Tribunal, en cuanto a que en~~

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

materia de nulidades debe regir una interpretación restrictiva, tendiente a la eliminación de su declaración en el solo interés de la ley, debiendo determinarse en cada caso si el vicio señalado produjo un perjuicio concreto a la parte que derive en la violación de algún precepto constitucional.

Mediante la resolución apelada el Juez instructor dispuso declarar la nulidad de los medios de prueba incorporados a la presente causa a fs. 34/49 (primera contestación de oficio de AFIP-DGI al requerimiento formulado por la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba), fs. 53/78 (impresiones del sistema Nosis efectuadas por la Fiscalía Federal de Villa María y consultas practicadas sobre la página web <http://rdap.lacnic.net> de la empresa prestataria del servicio de internet correspondientes a las direcciones de IP), fs. 87/93 (segunda contestación de oficio de AFIP-DGI al requerimiento formulado por la Fiscalía Federal de Villa María) y fs. 121/151 (tercera contestación de oficio de AFIP-DGI al requerimiento formulado por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba).

Ello, en razón de considerar que dicha prueba informativa contenía información amparada en el secreto fiscal previsto en el art. 101 de la Ley 11.683 y que no se dispuso el levantamiento del mismo en tiempo y forma.

**II.-** Postulado ello, soy del criterio que en este caso asiste razón al querellante particular AFIP-DGI y al Ministerio Público Fiscal en sus pretensiones recursivas.

Para ponernos en situación, vale recordar que las presentes actuaciones tuvieron su origen en la denuncia del Sr. Diego Clemente Peralta ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba en la cual pone en conocimiento del Fiscal que habrían utilizado su CUIT para generar facturas, cuando en realidad en la actividad económica que se inscribió en AFIP

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

nunca realizó ninguna operación ni facturación; que se anotició de tal situación al intentar inscribirse como tapicero en AFIP y enterarse que su CUIT estaba bloqueado. Posteriormente se habría corroborado con los informes de AFIP que se habría utilizado el CUIT de Peralta como usina de facturas apócrifas, siendo éste un eslabón más en una cadena de personas físicas y jurídicas (insolventes, y sin capacidad contributiva) utilizadas para realizar una evasión varias veces millonaria al Fisco.

Ante ello, el fiscal inició la correspondiente investigación, con comunicación al juez federal competente, y solicitó información a la AFIP sobre Peralta, la que se considera alcanzada por el secreto fiscal. Como resultado de esa información, surgieron un sinnúmero de empresas de las que formaba parte Peralta, junto a otras personas, y de donde se habría descubierto una usina de facturas truchas, que habrían ocasionado una daño multimillonario a las arcas del Estado.

Se advierte entonces que el Ministerio Público Fiscal no salió de pesca para buscar y encontrar posibles evasores de impuestos; se limitó a recabar elementos probatorios íntimamente vinculados con los hechos objeto de la mencionada denuncia y, a partir de allí, se encontró con un significativo número de empresas integradas por distintas personas que habrían participado de la comisión de diversos delitos tributarios y económicos, con un grave perjuicio fiscal, reitero, contra el Estado Nacional.

Todas esas empresas que habrían facturado con el CUIT del denunciante, pasan a ser objeto de la investigación y sospechados de haber participado en la comisión de ilícitos de carácter económico o tributario y, en consecuencia, no son terceros ajenos a la investigación y el curso de la pesquisa así lo habría demostrado.

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

En tal contexto advierto que en ningún momento se vulneró el secreto fiscal de personas que puedan ser consideradas terceros ajenos a la investigación practicada en autos por los fiscales federales actuantes, pues al averiguar sobre el CUIT del denunciante Peralta, perjudicado por el accionar de terceros que se desconocían hasta ese momento, surgieron las empresas conformadas por las personas que habrían estado usando ilegalmente el CUIT de Peralta para generar una usina de facturas falsas.

El secreto fiscal es aquella garantía destinada a resguardar toda información que el Fisco, es decir, el Estado en su calidad de organismo encargado de recaudar recursos económicos, posee de las personas en su condición de contribuyentes.

Sin perjuicio de ello, los derechos reconocidos a toda persona, incluso los reconocidos por la Constitución, no son absolutos en razón de que el ejercicio de los mismos se encuentra restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad.

El derecho a la intimidad tampoco puede considerarse un derecho absoluto, por cuanto está limitado por el propio ordenamiento jurídico, por el necesario respeto a los derechos de los demás y porque su valoración debe hacerse en cada caso concreto.

De esta manera en un Estado de derecho de base democrática y republicana, la función coercitiva del Estado de perseguir y castigar los delitos cometidos en todos los casos que la ley lo establezca, en especial los ilícitos violentos y aberrantes, los relacionados con la criminalidad organizada, el tráfico de estupefacientes, los ilícitos económicos y los hechos de corrupción gubernamental o administrativa, pública o privada, debe realizarse dentro de los parámetros que establecen las

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

leyes procesales y respetando las garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional.

Ahora bien, toda investigación penal que realiza el Estado implica una restricción de las garantías individuales, la que debe realizarse del modo establecido por la ley, la normativa constitucional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, esto significa que la eficacia de la investigación penal no puede lograrse de cualquier manera, con una concepción bélica, donde todo vale.

Este es el mayor desafío al que se debe enfrentar la administración de justicia penal en una democracia: lograr simultáneamente la eficacia en una investigación y el resguardo de las garantías constitucionales vigentes.

Sin embargo resultaría imposible realizar una investigación penal a los fines de descubrir la verdad real sobre la comisión de un delito, si se exigiera en cada uno de los actos de investigación preliminar el sagrado respeto de las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional concebidos en abstracto y más allá de lo que las leyes exigen.

Así, y sólo a modo de ejemplo basta considerar las vigilancias que realiza el personal policial comisionado en una investigación de narcotráfico, con seguimientos a los sospechosos respecto a las actividades que realizan o personas con las que se vinculan, todo lo cual es declarado por el personal policial y obra en las fojas de un expediente.

Asimismo, cabe mencionar las averiguaciones sobre la vida personal de los involucrados, que puede permitir conocer otros domicilios de interés para luego llevar a cabo otras medidas de prueba, como un allanamiento.

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

No caben dudas que dichas averiguaciones y seguimientos, que se realizan en el marco de una investigación dirigida por un fiscal o un juez -dentro de las facultades que la ley les acuerda-, implican una restricción a la garantía de la intimidad de las personas consagrada en el art. 19 de la CN. Sin embargo, considero que ello se encuentra justificado en el deber del Estado de perseguir la comisión de ilícitos, a fin de lograr una adecuada administración de justicia para compensar debidamente el derecho de las víctimas del delito.

En ese orden, daré inicio al análisis de diversas normas procesales y sustanciales en virtud del cual, a partir de una interpretación armónica y sistemática de las mismas, considero que el proceder del Ministerio Público Fiscal en los albores de la presente investigación fue ajustado a derecho y, por lo tanto, la incorporación de los mencionados medios de prueba resulta plenamente válido.

La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Ley 27.148), prevé expresamente en su artículo 7 que sus integrantes podrán requerir informes a organismos nacionales (tales como AFIP), provinciales, municipales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a organismos privados y a particulares, disposición inspirada en la independencia consagrada en el art. 120 de la CN, en cuanto prevé que el *"...Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República"*.

Asimismo, no debe pasarse por alto que -como ya vimos- las presentes actuaciones se inician a partir de una denuncia que fue presentada ante una fiscalía, lo cual





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

determina la aplicación de los artículos 181 y 196 2º pfo. del CPPN.

Dicho articulado determina que cuando una denuncia sea formulada ante un representante del Ministerio Público Fiscal, éste debe poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de instrucción -tal como se advierte a fs. 20 de autos- y deberá practicar las medidas de investigación ineludibles para determinar si existe mérito o no para promover acción penal, requerir la desestimación de la denuncia o la remisión de la causa a otra jurisdicción.

En ese marco es donde se ubica la actuación de las Fiscalías Federales intervinientes en los inicios de la presente instrucción al librar los oficios a la AFIP requiriendo diversa información, a fin de contar con elementos de convicción mínimos para proceder conforme lo dispuesto por el Código de rito tratándose, como vemos, de actos propios de su función.

A lo referido anteriormente debe agregarse que los informes requeridos a AFIP no quedan comprendidos en las previsiones de los arts. 210 -último párrafo- y 213 del CPPN, en cuanto se especifican en forma expresa aquellos actos procesales que deban ser ordenados, bajo pena de nulidad, por el órgano judicial.

En concreto, el Art. 210 último párrafo del CPPN en lo pertinente dispone: *"...Cuando fuere necesario la producción de actos que por su naturaleza y características fuesen definitivos e irreproducibles, inmediatamente solicitará dichas medidas al órgano judicial que corresponda."*

Todo ello, dentro del marco de las facultades acordadas al Ministerio Público Fiscal en el art. 212 del CPPN, que en lo pertinente dispone: *"...En el plazo*

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

establecido para desarrollar la investigación (artículo 207), el representante del ministerio público podrá citar a testigos (artículo 240), requerir los informes que estime pertinentes y útiles (artículo 222), disponer las medidas que considere necesarias en el ejercicio de sus funciones (artículo 120) y practicar las inspecciones de lugares y cosas (artículo 216) con la debida orden judicial de allanamiento en caso de ser necesario..."

Por su parte, el art. 213 del CPPN prevé que el representante del Ministerio Público Fiscal requerirá, bajo pena de nulidad, al juez de instrucción que practique los siguientes actos: "a) *La recepción de la declaración del imputado (artículo 294); b) Toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado, con excepción de los delitos cometidos en flagrancia (artículo 284) o de suma urgencia (artículos 281, 282), en cuyo caso nunca podrá superar las seis (6) horas. También deberá requerir inmediatamente, cuando corresponda, la cesación de las mismas; c) La producción de los actos irreproducibles y definitivos; d) Toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a la suspensión de la persecución penal o al sobreseimiento del imputado; e) Todo otro acto no comprendido en el artículo 212, y que el Código Procesal Penal sólo faculte practicar a un juez.*"

Como vemos, las medidas de prueba cuestionadas no encuadran en ninguno de los actos que el Código de rito exige para su validez, una necesaria intervención jurisdiccional.

A su turno, cabe traer a colación el propio art. 101 de la ley 11.683 en cuanto prevé que las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP son secretos y no serán admitidos como pruebas en causas judiciales, salvo las

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

excepciones que la propia ley establece, entre las que se encuentran *"...las cuestiones de familia, los procesos criminales por delitos comunes cuando las informaciones en cuestión se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen en la causa, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros..."*.

A criterio de la Suscripta es claro que la información remitida por AFIP encaja en una de las excepciones previstas por la norma por encontrarse íntimamente vinculada con los hechos investigados en autos, razón por la cual en este caso concreto el secreto fiscal considero que cede.

A su turno, resulta acertado traer a colación la Disposición 98/2009 de AFIP mediante la cual el organismo recaudador establece las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal, las que resultan de aplicación obligatoria a los fines del tratamiento de toda solicitud de información protegida por el instituto del secreto fiscal y alcanzan a todas las áreas de esta Administración Federal, que reciban, tramiten o contesten dichas solicitudes (art. 2).

Sin perjuicio de que ya explicité los motivos por los cuales considero que en autos no ha existido intromisión alguna a la intimidad fiscal de terceros ajenos a la investigación, cabe subrayar que dicha disposición, al reglamentar las excepciones al Secreto Fiscal, determina en qué casos se debe brindar información alcanzada por el secreto fiscal en orden al **objeto** del requerimiento.

Al efecto, establece que en el marco de ~~causas judiciales~~ **Punto 3.2.2.** ~~corresponde~~ suministrar

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

dicha información únicamente cuando la misma sea requerida como prueba en los siguientes tres supuestos: Cuestiones de familia -Punto 3.2.2.1.-, Procesos criminales por delitos comunes (cuando haya una directa relación con los hechos que se investiguen) -Punto 3.2.2.2.-, Juicios en los que la solicitud sea efectuada por el interesado y sea parte contraria el Fisco Nacional, Provincial, Municipal o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que no se revelen datos de terceros -Punto 3.2.2.3-.

En el punto, no puedo pasar por alto que la normativa bajo análisis consigna que el suministro de la información no debe revelar datos de terceros exclusivamente en el tercer supuesto, quedando excluido en tal aspecto los procesos criminales por delitos comunes. Ello, no obstante que en los presentes no se requirió información de terceros ajenos a los hechos investigados sino de personas que habrían estado involucradas en el uso fraudulento del CUIT del denunciante y demás maniobras objeto de la presente pesquisa.

A su vez, hace la salvedad de que cuando se trate de procesos o supuestos distintos a los previamente mencionados, la solicitud de información deberá ser rechazada dentro del quinto día hábil de recibido el oficio, de conformidad con lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Por su parte, distingue en orden al **sujeto** al enumerar a quiénes se les podrá brindar información alcanzada por el secreto fiscal, entre los que coloca al Ministerio Público Fiscal y sus unidades específicas de investigación que lo integren, siempre y cuando medie orden de juez competente o requerimiento del propio fiscal ~~interviniente. En este último caso, cuando:~~ a) Tenga a su

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

cargo la dirección de la investigación, conforme a lo previsto en los Artículos 180 segundo párrafo y 196 primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación o, b) se trate de denuncias formuladas por la propia AFIP (art. 3.1.5).

Repárese al respecto que en oportunidad de incorporarse los medios de prueba cuestionados en autos, la investigación se encontraba a cargo del Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia, si los requerimientos formulados por los representantes del Ministerio Público Fiscal en autos no hubieran sido considerados como excepciones a la regla, los funcionarios del organismo recaudador deberían haber rechazado las tres solicitudes de información, circunstancia que no se verificó en autos.

Además, -y tal como lo expusiera la Dra. Elisa Diez en representación del querellante particular AFIP-DGA en la audiencia celebrada en los términos del art. 454 del CPPN ante esta Alzada- cabe remarcar que la disposición bajo análisis en cuanto reglamenta el procedimiento para el suministro de información fiscal, no exige a los representantes del Ministerio Público Fiscal formulismo o disquisición alguna a los fines de requerir información fiscal, tal como acaeció en autos.

Al efecto, considero que la remisión de un oficio o cualquier otro instrumento mediante el cual se comuniquen una medida que disponga un requerimiento de esta naturaleza, y conste la existencia de un proceso criminal cuya instrucción se encuentre a cargo del Ministerio Público Fiscal, es suficiente para considerar a un requerimiento justificado, ya que son dichas constancias de la causa los elementos que permiten al organismo recaudador

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

corroborar si la solicitud encuadra o no en las excepciones previstas por la norma.

La formalidad sacramental que refieren los defensores para el levantamiento del secreto fiscal, no es una exigencia formal de la normativa vigente, y solo aparece como intento para alcanzar el desvanecimiento de una investigación llevada a cabo en legal forma, que habría arrojado el descubrimiento de un millonario perjuicio fiscal y la supuesta participación de numerosas personas en hechos delictivos por los que luego fueron imputados y posteriormente procesados.

Tampoco puede soslayarse que la información proporcionada por AFIP se ha mantenido resguardada en el marco del expediente judicial, en consonancia con lo dispuesto por el art. 204 del CPPN en cuanto dispone que el sumario sea siempre secreto para los extraños y público para las partes y sus defensores, quienes lo podrán examinar después de la indagatoria.

Asimismo, dicho extremo salvaguarda lo dispuesto por el punto 5 de la Resolución 4242/2018 modificatoria de la Disposición N° 98/09, en cuanto incorpora como Apartado 6 del Anexo: "6. Extensión del deber de confidencialidad al solicitante. En todos los casos en que se resuelva favorablemente un requerimiento de información amparada por el secreto fiscal, se dejará constancia de que el sujeto, órgano o autoridad receptora de la información deberá cumplir el deber de confidencialidad previsto en el segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Tributario."

Nótese que las distintas advertencias y/o alertas consignadas por los funcionarios de AFIP-DGI al contestar los oficios remitidos por las Fiscalías Federales intervinientes, respecto de la existencia de información amparada por el Secreto Fiscal en dichas contestaciones,

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

obedece a esta última previsión y no a la negativa de que dicha información sea utilizada como prueba en el presente proceso criminal.

Por último cabe mencionar la ley 25.326 de protección de datos personales, en cuanto resguarda toda aquella información asentada en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas.

Dicha norma distingue entre datos sensibles (revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual) y personales (cualquier otro tipo de información referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables), disponiendo que sólo en el caso de los datos sensibles es exigida la autorización por parte del titular de la información para su tratamiento, característica que no poseen los datos patrimoniales o tributarios (art. 5).

Esta distinción refleja el interés del legislador de resguardar aquellos datos inherentes a la íntima personalidad de los individuos, los cuales considero que merecen la más especial protección a la luz de los preceptos contenidos en nuestra Carta Magna.

No escapa a la Suscripta que los datos personales proporcionados por los responsables y los recabados por la AFIP se hallan sujetos a las disposiciones de esta ley, y por ende, el tratamiento de la información debe ajustarse a los principios generales relativos a la protección de datos contenidos en su Capítulo II, específicamente, cumplimentar ~~que los datos que se recojan deben ser~~ ciertos, adecuados,

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido, no pudiendo ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección.

Sin embargo, la propia AFIP -guardián del secreto fiscal- mediante la Disposición 98/2009, reguló el procedimiento aplicable a toda solicitud de información protegida por este instituto y estableció una serie de excepciones en los cuales debe proporcionar dichos datos, distinguiendo en forma expresa a quiénes (sujeto) puede brindárselos y en qué supuestos (objeto).

En este caso, el órgano fue el Ministerio Público Fiscal -en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales- y ello ha tenido lugar en el marco de una causa criminal fundada, viéndose verificada así las excepciones previstas por dicha normativa tal como fuera precedentemente reseñado.

En tal sentido, al carecer de veracidad los datos personales del denunciante obrantes en los registros de AFIP -como el caso que nos ocupa-, el uso como prueba de dichos datos no resulta incompatible con la finalidad que motivó su recolección.

En consecuencia, considero que lo actuado por el Ministerio Público Fiscal se ajusta estrictamente a las exigencias del Código de rito y de las normas sustanciales precedentemente referenciadas. De lo contrario estaríamos desconociendo las facultades que posee de investigar y perseguir los delitos de acción pública.

**III.-** Por último, estimo oportuno realizar una breve consideración acerca de la naturaleza de los delitos que se investigan en los presentes.

Los delitos económicos representan un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuyen de manera

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

negativa en la economía y empobrece a los Estados, circunstancia que profundiza los desequilibrios que pudieran existir en la distribución de la riqueza perjudicando a los sectores más vulnerables

Asimismo, implican una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional, lo que motivó que Argentina suscriba diversos compromisos internacionales tendientes prevenir y combatir este delito, tarea respecto de la cual el Poder Judicial no puede ser ajeno, debiendo mantener criterios firmes y coherentes a la hora de administrar justicia.

En tal sentido, mediante la presente he pretendido plasmar distintas normas de diferente naturaleza y jerarquía que, a partir de una interpretación armónica, autorizan a que la presente instrucción siga en pie y se pueda determinar la verdad real de los hechos aquí investigados, sin caer en formalismos rituales a partir de los cuales se intenta distorsionar el verdadero alcance del secreto fiscal.

Otorgarle al secreto fiscal una protección más allá de lo que establece la letra misma de la ley, es efectuar un blindaje que solo beneficia a quienes valiéndose de estas formalidades o ritualismos excesivos -que sólo surgen de una interpretación de la ley-, cometen un sinnúmero de ilícitos fiscales y tributarios, que conducen a que cada día las evasiones contra el Estado Nacional sean multimillonarias.

Resulta a mi criterio justo que la sociedad toda entienda el verdadero perjuicio que ocasionan los delitos de esta naturaleza, pues no sólo implican recursos económicos que no ingresan a las arcas públicas, para que el Estado pueda hacer frente a las necesidades de la población en materia de salud, educación, vivienda,

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILLIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281

seguridad y demás derechos esenciales de todos los habitantes, sino que determina un grandísimo perjuicio a aquellas empresas que llevan adelante una economía formal, que cumplen con las cargas impositivas, pues se encuentran en desigualdad de condiciones para competir en el mercado.

**IV.-** Por las razones dadas, considero que debe revocarse la resolución dictada con fecha 27.10.2021 por el Juez Federal de N° 1 de Córdoba debiendo, en consecuencia, continuar la causa según su estado. Sin costas (arts. 530 y 531, CPPN). Así voto.

Por ello;

**SE RESUELVE:**

**Por unanimidad:**

**I.- RECHAZAR** los planteos de nulidad por supuesta falta de fundamentación de la resolución recurrida, dictada con fecha 27 de octubre de 2021 por el Juez Federal N° 1 de Córdoba (art. 123 del CPPN.).

**II.- NO HACER LUGAR** al planteo de inconstitucionalidad de la Instrucción General de AFIP 8/2006 y sus modificaciones efectuado por el Representante del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de informar oralmente ante esta Alzada, conforme las razones brindadas en presente resolución.

**Por mayoría:**

**III.- CONFIRMAR** la resolución dictada con fecha 27 de octubre de 2021 por el Juez Federal N° 1 de Córdoba en cuanto dispuso declarar la nulidad de los informes remitidos por AFIP-DGI e incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93 y 121/151 de autos principales y de todos los actos que fueran su consecuencia (conf. art. 101 de Ley 11.683, arts. 18 y 19 de la CN. y arts. 167, 168, 172 y cc. del CPPN.).

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70949/2018/19

**IV.- Sin costas (arts. 530 y 531 CPPN.).**

**V.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado,  
publíquese y bajen.-**

GRACIELA MONTESI  
JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO AVALOS  
JUEZ DE CÁMARA

LILIANA NAVARRO  
JUEZA DE CÁMARA  
en disidencia parcial

MARIO R. OLMEDO  
Secretario de Cámara

---

Fecha de firma: 23/06/2022

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara



#35895191#332231179#20220623124311281